

Perspectivas

SUPLEMENTO DE ANÁLISIS POLÍTICO



Edición 176
Agosto 2024

 **CETCAM**
Centro de Estudios Transdisciplinarios
de Centroamérica

Perspectivas está de regreso

Después de varios meses de ausencia, el boletín mensual Perspectivas, producido por el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), está de regreso para continuar ofreciendo insumos de análisis sobre Nicaragua y Centroamérica. Con esta edición iniciamos temporada con nuevos enfoques, agenda temática y formatos.

Agradecemos la comprensión de nuestra audiencia y estamos abiertos a sus comentarios y sugerencias.

Lecciones de la transición en Nicaragua

Las elecciones del 28 de julio pasado en Venezuela y la posibilidad de un cambio político para ese país, colocaron de nuevo sobre la mesa el debate sobre las transiciones políticas. En Nicaragua, donde el más grande desafío también es el cambio político, una nueva transición y la construcción de un país democrático, revivieron las opiniones sobre el tema. No es casual.

Ambos países comparten el infortunio de tener regímenes autocráticos que han sometido a

sus pueblos a través de sistemas opresivos que diariamente cometen graves violaciones de los derechos humanos; han provocado grandes flujos de desplazamientos forzados por la persecución, violencia e incertidumbre; y utilizan cualquier medio para aferrarse al poder. Nicaragua ya vivió una transición hacia la democracia en 1990. El proceso, con todas sus dificultades, dejó importantes lecciones pertinentes de rescatar.

1.1 Los antecedentes y el contexto de la transición

La transición política que se abrió en Nicaragua en 1990 tiene antecedentes y no llegó de la nada. Si fuera posible establecer una fecha de sus inicios, se podría señalar el 7 de agosto de 1987 con la firma de los Acuerdos de Esquipulas que comprometía a los cinco países firmantes a restablecer los derechos políticos, permitir el retorno de los exiliados, desarrollar diálogos nacionales y realizar elecciones libres, además de cesar las ayudas a los grupos insurgentes.

Esos acuerdos cambiarían el curso de toda Centroamérica en un contexto caracterizado por la finalización de la Guerra Fría, el desmoronamiento del bloque socialista, un contexto latinoamericano favorable a las negociaciones y la insostenibilidad de los conflictos bélicos que asolaban a la región.

Los sandinistas tuvieron que comprometerse con los Acuerdos de Esquipulas a pesar de que implicaban un cambio radical en su modelo y estrategia política porque necesitaban finalizar

la confrontación armada y buscar la sobrevivencia de su proyecto político. Los cambios aceptados ponían en riesgo su continuidad en el poder, pero no tenían alternativa; continuar en el mismo estado de situación implicaba el riesgo de perderlo de la peor manera.

Esquipulas abrió el camino de las negociaciones internas, principalmente con la Resistencia. Esas negociaciones entre dos enemigos enfrentados a muerte fueron posibles porque ambos habían llegado al límite de sus posibilidades. En el caso del régimen sandinista, la situación era crítica. Tras diez años de guerra y miles de víctimas; de acciones políticas, económicas y sabotajes vinculados al gobierno estadounidense; políticas económicas erradas y restricciones a los derechos ciudadanos; se había acumulado un desgaste social, político y económico extremo. La población padecía hiperinflación, desabastecimiento, escasez extrema de divisas

y numerosas familias fragmentadas. A finales de los años 80, la Unión Soviética y el campo socialista se desplomaron, dejando al régimen sandinista sin sus principales apoyos militar y económico.

La Resistencia enfrentó su propia crisis. A raíz del escándalo Irán-Contra en 1986, el Congreso de los Estados Unidos suspendió los fondos destinados a la Contra, con lo que comenzó a escasear el financiamiento y la logística para las Fuerzas de Tarea disminuyó rápidamente. Los acuerdos de Esquipulas no se implementaron de inmediato, pero obligaban a los países vecinos a cesar su apoyo, lo que los dejaría sin las bases desde donde realizaban

entrenamiento, refresco y reabastecimiento de sus tropas.

En una entrevista, Jaime Morales Carazo, líder de la contra y más tarde vicepresidente de Ortega, afirmó que a finales de 1987, oficiales de la CIA les manifestaron que estaban abandonados a su suerte. El puntillazo final ocurrió cuando George Bush llegó a la Presidencia de los EEUU en 1988, y cambió el apoyo a la Contra y la estrategia de Reagan, por el respaldo al proceso de paz en la región. En estas circunstancias, ambos bandos se fueron quedando sin más alternativa que buscar una salida negociada.

1.2 El camino a las elecciones

En marzo de 1988, una delegación de la Resistencia presidida por miembros de su Directorio Político: Alfredo César, Adolfo Calero y Aristides Sánchez se reunió en el poblado de Sapoá con otra delegación del gobierno sandinista encabezada por Humberto Ortega, jefe del ejército. El cardenal Miguel Obando y Bravo y el secretario general de la OEA, Joao Baena Soares fueron los testigos de los acuerdos firmados, que sentaron las bases para negociaciones subsiguientes centradas en el cese de las acciones militares.

Las negociaciones posteriores fueron muy accidentadas y en varias ocasiones estuvieron a punto de fracasar porque los acuerdos iniciales establecían la desmovilización de la resistencia a la vez que se llevaba adelante el restablecimiento de las garantías democráticas, pero la desconfianza de las partes no permitió avanzar. Para la Resistencia, el punto más debilitante fue la división entre los representantes del movimiento armado y los civiles del Directorio Político. La diferencia entre unos y otros, es que los primeros temían por su futuro, mientras que los políticos civiles estaban interesados en el éxito de las negociaciones

porque les permitían entrar en el juego político. Así, llegaron a la mesa de negociaciones sin un plan de transición que considerara distintos escenarios y sin una propuesta negociadora integral.

Las negociaciones entre la Resistencia y los sandinistas se estancaron, prolongando la situación sin diálogo ni desmovilización. El FSLN decidió unilateralmente avanzar en una liberalización política relativa, abriendo un pequeño resquicio a la libertad de expresión y la movilización política de las fuerzas opositoras. Aun así, todavía se produjeron detenciones de líderes políticos, hostigamiento a actividades de la oposición, amenazas y otras manifestaciones represivas.

El 14 de febrero de 1989, durante la 4ª Cumbre de presidentes centroamericanos celebrada en San José, Ortega anunció el adelanto de las elecciones para febrero en lugar de noviembre de 1990 como lo establecía la Constitución. Esta decisión incentivó a los líderes políticos a enfocarse en las elecciones y desentenderse cada vez más de la parte armada de la Resistencia.

Así, mientras los grupos armados de la Contra permanecían en los enclaves, ansiosos porque su destino era decidido por otros, los políticos civiles buscaron a los partidos como vehículos de sus pretensiones electorales.

El Directorio Político de la Resistencia prácticamente se disolvió cuando sus líderes civiles se incorporaron a diferentes partidos políticos. Paradójicamente, las fuerzas que combatieron contra el régimen sandinista y jugaron un papel clave en desencadenar la democratización y las elecciones, no tuvieron una representación unificada y coherente en ese proceso electoral. Para 1989 el actor protagónico de la oposición dejó de ser la Resistencia y se trasladó a los partidos políticos.

La Unión Nacional Opositora se conformó en junio de 1989 en un esfuerzo por presentar un

frente unido de oposición al FSLN. Se conformó con catorce partidos políticos que provenían de todo el espectro político e ideológico: liberales, conservadores, social cristianos, social demócratas, socialistas y comunistas. Todos tenían el mismo peso y los mismos derechos dentro de la alianza. Escogieron a Violeta Barrios, viuda de Pedro Joaquín Chamorro, como su candidata. Las candidaturas a diputaciones se distribuyeron entre los partidos de la alianza, una decisión clave y ejemplo de voluntad unitaria para mantener la alianza antes de las elecciones. Luego de una campaña accidentada y con mucha violencia política, la UNO con Violeta Barrios de Chamorro como candidata, fue a las elecciones el 25 de febrero de 1990 y obtuvo una victoria electoral contundente.

1.3 Las complejidades de la transición

El FSLN no se había preparado para perder las elecciones, ni la UNO para ganarlas. La alianza no tenía un plan consensuado para conducir la transición después de las elecciones; sus integrantes tenían diferentes visiones del proceso que se agudizaron aceleradamente y llevaron a su división en dos bloques. Por un lado, los que creían que la transición debía ser un proceso gradual y negociado en la medida de lo posible; por otro, los que pensaban que debían tomar decisiones rápidas y categóricas para desalojar a los sandinistas de todos los espacios de poder.

Los retos del nuevo gobierno eran mayúsculos. Los principales tenían que ver con el traspaso de poder sin violencia o conflictos desestabilizadores; negociar la desmovilización de

la Resistencia; reorganizar el Estado y cambiar el modelo económico para obtener los necesarios recursos financieros, estabilizar y reactivar la economía nacional destruida por la guerra. Violeta Barrios de Chamorro, la presidenta electa, optó por negociar con el FSLN sin el apoyo de una parte de la UNO, pues a sus ojos era la mejor forma de garantizar una transición relativamente pacífica que le permitiera afrontar los desafíos planteados.

Antes de asumir la presidencia, se firmó el llamado Procedimiento para la Transferencia del Mando Presidencial en la República de Nicaragua, o Protocolo de Transición, en marzo de 1990. Los puntos más importantes fueron la permanencia y subordinación de las

fuerzas de defensa y orden público a la autoridad civil, reducción de los efectivos militares, el respeto a las propiedades urbanas y rurales transferidas antes del 25 de febrero de 1990, garantía de estabilidad a funcionarios y empleados del gobierno. Los acuerdos más polémicos fueron la continuidad de Humberto Ortega como jefe del Ejército, y la aceptación de las transferencias masivas de títulos de propiedad posterior al 25 de febrero, conocida como La Piñata.

Este fue el punto de quiebre con el sector más radical de la UNO. Para ellos, el Protocolo de transición fue una capitulación del gobierno; se declararon en abierta oposición al gobierno Chamorro y la alianza se rompió cuando ocho de los catorce partidos no asistieron a la toma de posesión presidencial. La UNO sucumbió a

sus propias contradicciones aún antes de la toma de posesión y el recién instalado gobierno de Violeta Barrios de Chamorro bregó el complejo camino de la transición sin el apoyo de sus aliados.

El Protocolo de Transición no fue suficiente para resolver las contradicciones y conflictos de ese tiempo, gravitó poderosamente sobre acontecimientos posteriores y en ello también influyó la alta conflictividad y movilización social durante la primera mitad de los 90, así como la fuerza del FSLN en tanto partido de oposición. El retorno de los sandinistas al poder, con Daniel Ortega a la cabeza, dieciséis años después, y su capacidad de llevar adelante una regresión acelerada de los logros democráticos de entonces, sugiere que la transición política fue incompleta y frágil.

1.4 El desafío histórico de una nueva transición

Desde esa perspectiva, el más grande desafío que enfrenta nuevamente la sociedad nicaragüense es la construcción de un régimen y un país democrático en el que se garanticen reglas estables del juego político, así como la participación de quienes históricamente han estado excluidos en los márgenes de la sociedad y la economía. Esta es una deuda histórica de las élites que desde los años 90 se enfocaron en ententes privadas y excluyentes donde prevalecieron sus valores, intereses y beneficios económicos de corto plazo hasta que el remezón ciudadano en abril de 2018 los sacó de su dinámica.

La familia Ortega-Murillo encabeza una dictadura dinástica que no se reduce solamente a ellos. Incluye un sofisticado ecosistema institucional, legal, de lealtades y corrupción; una estructura de poder con un entramado político institucional lleno de trampas y candados que requiere ser desmontado. Ese proceso será complejo, y seguramente estará expuesto a conflictos, avances y retrocesos, en

tanto el nuevo régimen democrático no se afiance. De manera que la oposición debe prepararse para navegar estas aguas tormentosas, acelerar la descomposición de la dictadura y consolidar la democracia.

El régimen totalitario de los Ortega Murillo, continuador de dictadores y caudillos, es el obstáculo que se interpone entre las aspiraciones de la inmensa mayoría de los nicaragüenses y la efectiva realización de la democracia. Salir de él es el objetivo declarado de los grupos que se reconocen como opositores democráticos. Pero, son pocos los que hablan de cómo se impulsará la transición, las condiciones para alcanzarla y la construcción democrática. En síntesis, cómo entienden la democracia.

De ahí que una de las tareas más importantes y urgentes para la oposición consiste en clarificar estas interrogantes y traducirlas en una propuesta que sea coherente con el esfuerzo y los sacrificios que la sociedad

nicaragüense ha pagado, sobre todo durante los últimos años. El reto de salir de esta dictadura con afanes dinásticos es enorme, pero una vez que se logre, abrirá la posibilidad de que esta vez, habiendo aprendido las

lecciones de la anterior transición y la experiencia más reciente, los liderazgos y fuerzas políticas prodemocracia sienten las bases sólidas de una democracia verdadera.

Venezuela y la puerta de la esperanza

Veinticinco años después de la instalación del régimen chavista en Venezuela, la puerta de la esperanza se abrió el pasado 28 de julio cuando los resultados de las elecciones presidenciales dieron como resultado que Edmundo González Urrutia, el improbable candidato de la oposición, lograra una arrolladora victoria con más del 67 % de los votos.

Alcanzar esa victoria electoral ha significado para los venezolanos recorrer un largo camino lleno de obstáculos, penurias y sacrificio. ACNUR estima que 7.7 millones de venezolanos se han visto forzados a salir del país huyendo de la persecución, la violencia, la pobreza y buscando mejores oportunidades para sus familias. Miles de ellos han cruzado el llamado Tapón del Darién padeciendo grandes penurias para llegar a Estados Unidos.

En años anteriores la oposición venezolana pasó por distintos momentos en los que se acercó mucho a la posibilidad de un cambio político, pero fue hasta ahora que se dio la convergencia de condiciones y la posibilidad de construir una alternativa electoral de composición amplia que lograra condensar el descontento y la voluntad de cambio de una gran mayoría de venezolanos. Luego de numerosos obstáculos que incluyeron la inhibición de la principal líder opositora María Corina Machado como candidata presidencial y una campaña desigual llena de violencia política estatal en contra de la oposición, se logró conformar e inscribir a Edmundo González como candidato al frente de la Plataforma Unitaria Democrática que agrupa a diez partidos políticos. Durante la campaña y a pesar de las amenazas, la gente se volcó multitudinariamente a las calles, de la misma forma que acudió masivamente a las urnas para

depositar su voto y defenderlo de los intentos de fraude de parte del chavismo.

El régimen encabezado por Nicolás Maduro, heredero de Hugo Chávez, se ha negado a reconocer su derrota electoral y ha activado todos sus recursos autoritarios y represivos para continuar en el poder, de manera que la cantidad de personas encarceladas, muchas en condición de desaparición forzosa porque fueron detenidas por fuerzas oficialistas sin órdenes judiciales y con uso de violencia, ya alcanzan más de 2000, mientras que las personas asesinadas ascienden a más de 20.

Los venezolanos se han mantenido movilizados en las calles desde el día de las votaciones; mientras que la comunidad internacional ha rechazado abiertamente el evidente fraude de Maduro, en algunos casos con fuertes declaraciones como las del presidente de Chile, Gabriel Boric. Incluso aliados tradicionales como Brasil, Colombia y México han demandado públicamente que se muestren las actas de las votaciones y se transparenten los resultados electorales. En Centroamérica, la mayoría de los países se han sumado a las voces que demandan transparencia de los resultados y respeto de la voluntad ciudadana, con excepción de Nicaragua y Honduras que se apresuraron a felicitar a Maduro.

El régimen autoritario incrementa la represión contra los líderes opositores y la ciudadanía que los ha desafiado. El escenario es complejo y no hay certezas, pero nunca como ahora la esperanza de que el cambio es posible se mantiene entre los venezolanos y se animan colectivamente repitiendo constantemente la estrofa de su himno “Gloria al bravo Pueblo”

Venezuela y la puerta de la esperanza



25 años después de la instalación del régimen chavista, la puerta de la esperanza se abrió el 28 de julio cuando Edmundo González Urrutia ganó las presidenciales, con más del

67% de los votos



VS



El régimen de Nicolás Maduro

se ha negado a reconocer su derrota electoral y ha activado todos sus recursos autoritarios y represivos para continuar en el poder

+2000

Personas detenidas por fuerzas oficialistas sin órdenes judiciales y con uso de violencia,

+20

personas asesinadas

Enfrentaron numerosos obstáculos como la inhibición de la principal líder opositora María Corina Machado como candidata presidencial, una campaña desigual llena de violencia política estatal en contra de la oposición.

Victoria electoral



Alcanzar esa victoria electoral ha significado para los venezolanos recorrer un largo camino lleno de obstáculos, penurias y sacrificio: según ACNUR

7.7 millones de venezolanos

se han visto forzados a salir del país huyendo de la persecución, la violencia, la pobreza y buscando mejores oportunidades para sus familias.

Comunidad internacional

ha rechazado abiertamente el evidente fraude de Maduro, incluidos aliados tradicionales como Brasil, Colombia y México.

Centroamérica se ha sumado a las voces que demandan transparencia de los resultados con excepción de Nicaragua y Honduras que se apresuraron a felicitar a Maduro.